

de los flujos masivos de refugiados, concediéndose a determinadas personas que forman parte de un grupo determinado una cierta protección por un periodo determinado en virtud de una decisión política. Es más, su aplicación no necesita una decisión judicial o administrativa individualizada. Para el autor no cabe duda que la creación de una organización internacional de ámbito universal para la protección de los refugiados y personas desplazadas, sería el marco más propicio de protección, aunque reconoce que esto es una utopía en los tiempos que corren. El capítulo VII versa sobre la responsabilidad internacional en esta materia, tratando tanto la responsabilidad según los sistemas regionales como según el Derecho internacional general. El estudio se termina con una “condición general” en la que el autor se muestra muy insatisfecho con el marco jurídico internacional de protección, opinión que compartimos plenamente. Hechos estos comentarios, solo nos queda agradecer y felicitar al Profesor Oriol Casanovas en lo que nos ilustra con rigor, precisión, claridad en uno de los temas que la comunidad internacional tiene que afrontar con más frecuencia de lo que se desearía.

Romualdo Bermejo García  
Universidad de León

CERVELL HORTAL, María José: *El derecho internacional y las armas químicas*, Centro de Publicaciones, Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid, 2005, 404 pp.

---

La utilización de las armas químicas está absolutamente prohibida por el Derecho internacional actual, tanto en un conflicto armado como en tiempo de paz. Esta afirmación se sustenta no sólo en el Derecho internacional convencional, y en particular en el artículo I de la Convención sobre armas químicas de 1993, verdadera piedra angular sobre la que aquél se asienta, sino también desde la perspectiva del derecho consuetudinario. Sin embargo, como afirma la autora del presente libro, “no podría afirmarse lo mismo... del resto de conductas que también la Convención prohíbe (transferencia, almacenamiento, fabricación, etc.) en tanto en cuanto saltaron a la palestra internacional por vez primera cuando se empezó a redactar la Convención”, aunque la gran acogida que ésta ha tenido hasta el momento, podría ser indicativa de que también para la prohibición de tales conductas se ha allanado el camino que lleva hasta su aceptación como norma consuetudinaria.

El libro objeto de la presente reseña tiene su origen en la Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Murcia por la autora en 2004, que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado y el Premio otorgado por el Ministerio de Defensa para tesis doctorales y trabajos de investigación en su convocatoria correspondiente al año 2005. El libro tiene como objeto el análisis de la regulación jurídica internacional so-

bre las armas químicas y su prohibición por el actual Derecho internacional. Análisis que la autora –María José Cervell Hortal, profesora ayudante de Derecho Internacional Público en la Universidad de Murcia– lleva a cabo con una redacción excelente, una documentación extraordinariamente completa y una sistemática muy oportuna y adecuada al tema central del libro.

Desde esta óptica, el libro se divide en cuatro partes, la primera de las cuales se dedica a la prohibición jurídico internacional de las armas químicas (pp. 27-191), la segunda al control de su cumplimiento (pp. 197-261), la tercera a los problemas pendientes (pp. 267-298), y la cuarta y última, que la autora titula de forma interrogativa “¿Se cumple, en la práctica, la CAQ?” a las cuestiones derivadas de su incumplimiento y a la responsabilidad que ésta genera (pp. 303-346).

En la primera parte se analiza de forma exhaustiva la Convención sobre armas químicas (CAQ) de 1993, instrumento básico y punto de referencia obligado en el momento actual para adentrarse en el estudio de la regulación jurídica internacional existente sobre la materia. Como es sabido, no resulta tarea sencilla el adentrarse en los textos generalmente farragosos de los tratados internacionales con el fin de analizarlos de forma clara y sistemática al mismo tiempo. Pero conviene advertir que la autora ha sabido resolver este reto de forma muy convincente estudiando tras el proceso de su negociación, tanto las obligaciones de los Estados Partes (declarar, destruir, no producir y no transferir además de adoptar las medidas nacionales necesarias para su cumplimiento) como los derechos (asistencia y protección, cooperación internacional y desarrollo económico y tecnológico, así como protección de la confidencialidad), terminando con las declaraciones y reservas formuladas a la Convención.

La segunda parte se dedica al control del cumplimiento de la CAQ, en particular el sistema de verificación incorporado a la misma: declaraciones, aclaraciones e inspecciones, de las que, como afirma la autora: “sólo las dos últimas son medidas de verificación propiamente dichas” (p. 201), siendo las inspecciones el sistema de verificación *stricto sensu*. Las inspecciones previstas por la CAQ pueden llevarse a cabo sobre las instalaciones declaradas por los Estados Partes o por denuncia, aunque también pueden realizarse ante la alegación de empleo de armas químicas, en cuyo caso y a diferencia de las realizadas por denuncia, el Estado que las ha sufrido busca una ayuda efectiva. El sistema de verificación establecido por la CAQ se completa con el control ejercido individualmente por los Estados Partes en el ámbito interno (situación que regula en nuestro país la *Ley 49/1999, de 20 de diciembre, sobre medidas de control de sustancias químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas*).

En definitiva, puede afirmarse que las tareas de verificación recaen principal aunque no exclusivamente, en la Organización para la prohibición de las armas químicas (OPAQ) a través de sus inspectores y de la Secretaría Técnica. Resulta por ello muy oportuno la inclusión de un capítulo dedicado a la OPAQ en cuanto organización específica para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Convención (Capítulo VI, pp. 235-261), en el que se analizan las cuestiones relativas a su estructura, procedimiento de toma de decisiones, personalidad jurídica y competencias.

La tercera parte se dedica a los problemas pendientes, a los que la autora dedica el Capítulo VII con el ilustrativo título: “La Convención sobre armas químicas de 1993: no es oro todo lo que reluce” (pp. 267-298). En él se analizan tanto las cuestiones que la Comisión Preparatoria de la OPAQ no resolvió en su momento (aunque algunas de ellas han sido posteriormente solucionadas), como los retos de la Primera Conferencia de Revisión (2003): la cuestión de la pretendida universalidad de la CAQ; los fallos y las consiguientes propuestas de solución del sistema de verificación; la actualización de la Convención ante los avances científicos; la legislación de desarrollo de la CAQ; la promoción de la cooperación internacional en la materia; la asistencia y protección ante la amenaza o ataque con armas químicas, y, finalmente, el control sobre la transferencia de sustancias químicas susceptibles de utilizarse en la fabricación de tales armas. A continuación y con gran sentido crítico, la autora analiza las cuestiones que la Conferencia debería haber tratado como el castigo de las acciones contrarias a la CAQ llevadas a cabo por particulares o la cuestión de la protección del medio ambiente, sobre la cual la Convención articula dos cauces diferentes: el desarrollo de la legislación nacional (art. VII.3) y los problemas derivados de la destrucción de las armas químicas (art. IV.10). Como afirma la autora, aunque la CAQ sea novedosa “en cuanto tratado de desarme que incluye disposiciones medioambientales, lo cierto es que no basta por sí misma para asegurar la protección en relación con las armas químicas, pues no articula ningún procedimiento preciso para ello...” (p. 287).

Finalmente en la cuarta y última parte del libro que la autora titula “¿Se cumple, en la práctica la CAQ?” se analiza el estado de la cuestión sobre su cumplimiento real por los Estados Partes, así como las consecuencias de su incumplimiento. En relación con la primera de las cuestiones apuntadas y tras repasar las materias más delicadas (declaraciones iniciales, información sobre las medidas legislativas y administrativas, falta de desarrollo de la legislación nacional, inspecciones...), la autora concluye que “pese a todo, aunque los incumplimientos detectados no hacen temer por la vida de la Convención, sí obligan a permanecer vigilantes, sobre todo porque los Estados parecen no estar muy dispuestos a activar los mecanismos de reacción previstos, temiendo quizás las consecuencias políticas de esta opción” (p. 307). Por lo que respecta al incumplimiento, la CAQ prevé un sistema de verificación fundamentalmente preventivo y de arreglo pacífico de controversias aplicable en condiciones y momentos diferentes. El capítulo se cierra con un oportuno análisis sobre la relación existente entre las normas de la CAQ con el derecho de la responsabilidad internacional de los Estados, así como sobre la interesante cuestión de la posición del individuo ante la violación de la prohibición de las armas químicas.

El libro se completa con unas conclusiones y una exhaustiva bibliografía que la autora estructura en cuatro apartados: doctrinal, documental, jurisprudencial y páginas web más consultadas. En definitiva se trata de un trabajo riguroso, muy bien estructurado y argumentado que le hace muy atractivo pues aunque su núcleo principal gira en torno a la CAQ, la autora no elude el tratamiento de otras cuestiones más ge-

nerales pero también más complejas que se encuentran intrínsecamente relacionadas con aquélla, por lo que no podemos sino felicitarla por el enfoque coherente a la vez que crítico del tema analizado.

Antonio Blanc Altemir  
Universidad de Lleida

DE CASTRO RUANO, José Luis y UGALDE ZUBIRI, Alexander: *Anuario sobre la acción exterior de Euskadi 2005*, IVAP, Oñati, 2006, 354 p.

---

El Anuario objeto de estos comentarios analiza pormenorizadamente la acción exterior del País Vasco durante el año 2005, dado así continuidad a los trabajos realizados por los mismos autores en ediciones anteriores, como la acción exterior del País Vasco (1980-2003), y el Anuario sobre la acción exterior del País Vasco 2004, publicados igualmente por el IVAP y en Oñati.

Dedicado el Profesor Iñaki Aguirre Zubalari, Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco, desgraciadamente recientemente fallecido, el Anuario 2005 pasa revista con todo lujo de detalles a toda clase de actividades que el Gobierno Vasco desarrolla en el exterior. Y es que, como señalan los autores en la Introducción “En una sociedad globalizada e interdependiente como la actual, la política exterior es prácticamente una prolongación del ejercicio de la acción política en el ámbito interior; en estos tiempos todos los campos de la actividad política adquieren en mayor o menor medida una dimensión internacional” (p. 13). En estas circunstancias, no es extraño que el Consejo de Gobierno del País Vasco adoptara el 15 de marzo de 2005 la *Estrategia de Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Euskadi*, elaborada por la Secretaría General de Acción Exterior, con la participación de todos los Departamentos de dicho Gobierno así como otras entidades públicas y privadas. Se trata pues de un instrumento político relevante ya que con él se pretende reordenar, coordinar y mejorar la política del Gobierno Vasco en el ámbito de la acción exterior.

Desde esta perspectiva, los autores inician el Anuario llevando a cabo un balance que consideran muy positivo, al poner de relieve una clara tendencia hacia un incremento sostenido de la acción exterior vasca. La participación de la Comunidad Autónoma Vasca en la Unión Europea constituye uno de los ejes principales de la acción exterior, como no podía ser de otra manera, algo que siempre ha tenido muy presente el Gobierno vasco. Es así como se analiza el papel del euskera en la UE, destacando que el año 2005 será aquel a partir del cual el euskera, junto con las otras dos lenguas cooficiales del Estado (catalán/valenciano y gallego), podrá ser utilizado oficialmente ante las instituciones comunitarias, lo cual no quiere decir que se le esté reconociendo